



Provincia de Buenos Aires

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
Centro Administrativo Gubernamental Torre II
Piso 10 – La Plata

LA PLATA, en la fecha de registro.-----

AUTOS Y VISTOS: el expediente número 2360-0536161/2017, caratulado
“Laboratorios Phoenix S.A.I.C.Y.F.”.-----

Y RESULTANDO: Que llegan a esta instancia las presentes actuaciones con los recursos de apelación interpuestos a fs. 1295/1320 por el Sr. Hermenegildo Pini en nombre y representación de LABORATORIOS ELEA PHOENIX S.A. (antes Laboratorios Phoenix S.A.I.C.Y.F.), con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Grinberg y por este letrado a fs. 1347/1351, como gestor procesal y patrocinante de los Sres. Rodolfo Civale, Carlos Mayotti, Esteban Gully y Fernando Gestal, contra la Disposición Delegada SEATYS N° 1744, dictada con fecha 24 de junio de 2020, por el Departamento Relatoría II de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.-----

-----Por el acto citado, obrante a fs. 1253/1288, se determinan las obligaciones fiscales de la firma LABORATORIO PHOENIX SAICYF (CUIT 30-54464021-2, CM 902-910347-8), en su carácter de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Régimen del Convenio Multilateral, correspondientes al período fiscal 2013 (enero a diciembre), por el ejercicio de las actividades “Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos” (Código NAIIB 242310), “Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de vidrio, de plástico, de caucho y goma y químicos ncp” (Código NAIIB 514939), “Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.” (Código NAIIB 659990), “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”(Código NAIIB 741400), “Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería” (Código NAIIB 523110), “Venta al por mayor de productos farmacéuticos cuando sus establecimientos estén ubicados en la provincia de Buenos Aires” (Código NAIIB 513311) y “Servicios empresariales n.c.p. (Código NAIIB 749909). En su artículo 7°, establece las diferencias adeudadas al Fisco por haber tributado en defecto el impuesto, que ascienden a la suma de Pesos un millón setecientos sesenta y siete mil ciento treinta y nueve con 30/100 (\$ 1.767.139,30), con más los accesorios previstos por el artículo 96 del Código Fiscal (Ley N° 10.397, t.o. 2011, y sus

modificatorias). -----

-----Asimismo, aplica una multa equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto omitido, por haber constatado en el período involucrado la comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 61, primer párrafo, del Código Fiscal (artículo 8°). Por último, establece que responden de manera solidaria e ilimitada con el contribuyente de autos, por el pago del gravamen, la multa y los intereses que pudieran corresponder, los Sres. Rodolfo Civalé, Carlos Mayotti, Esteban Gully y Fernando Gestal, de conformidad a lo normado por los artículos 21 inciso 2, 24 y 63 del citado plexo legal (artículo 9°).-----

-----Que a fs. 1357 se elevan las actuaciones a este Tribunal (artículo 121 del Código Fiscal) y a fs. 1358 se adjudica la causa para su instrucción a la Vocalía de 4ta. Nominación, haciéndose saber que conocerá en la misma la Sala II (fs.1405).-----

-----Que a fs. 1359 el Dr. Gonzalo García Delatour, en carácter de apoderado de los Sres. Civalé, Mayotti y Gully, ratifica la gestión realizada en los términos del artículo 48 del CPCCBA, cuya nulidad fue declarada por este Tribunal a fs. 1431/1432 respecto del Sr. Fernando Gestal, en virtud de la preclusión de los plazos que determina esa norma (v. Sentencia de fecha 29 de abril de 2022, Reg. Nro. 3239).-----

-----Que a fs. 1499 se ordena el traslado del recurso presentado a la Representación Fiscal (artículo 122 del Código Fiscal), obrando el escrito de responde a fs. 1503/1521.-----

-----Finalmente, mediante resolución de fs 1522, se hace saber que la Sala II ha quedado integrada definitivamente con el Dr Ángel Carlos Carballal en carácter de Vocal subrogante (conf. Ac. Ext. N.º 100/22) conjuntamente con el Cr Rodolfo Dámaso Crespi, Vocal de la 6ta Nominación y la Dra Irma Gladys Ñancuñil, en carácter de conjueza (conf. Ac. Ord. N.º 59/22, Ac. Ext. N.º 102/22 y Acta N.º 3). En materia probatoria, se tiene por agregada la documental acompañada al recurso y se rechazan la pericial contable e informativa ofrecidas, por innecesarias para la resolución de la causa. Asimismo, atendiendo al estado de las actuaciones, se dicta el llamado de autos para sentencia (artículos 124, 126 y 127 del Código Fiscal) el que ha quedado



consentido.-----

Y CONSIDERANDO: I.- a. Que, en el recurso en análisis, la parte apelante plantea en primer término la **nulidad del acto administrativo** por considerar que con su dictado se conculcaron las normas que establecieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). El derecho de la comunidad de cuidar la propia salud fue desoído por ARBA y se vio menoscabado de ese modo el derecho de defensa de la recurrente, dado que su ejercicio implicaba la transgresión de las normas relativas al ASPO. Cita jurisprudencia de tribunales provinciales y del Tribunal Fiscal de la Nación relativas a este tema.-----

-----Al mismo tiempo opone la excepción de **prescripción** total de la acción para reclamar y perseguir el cobro del impuesto sobre los Ingresos Brutos para el período fiscalizado (enero a diciembre de 2013) y de cualquier diferencia que surja de ese ajuste. Plantea la existencia de un conflicto normativo entre el Código Fiscal y el Código Civil y Comercial de la Nación y afirma en este punto, que la pretensión de ARBA de aplicar las normas del Código Fiscal provincial contradice de manera directa y frontal la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Ullate, entre otros. Alega que en dicho fallo determinó la aplicación de los plazos del Código Civil, considerando que el inicio del cómputo de la prescripción comienza a contarse desde la “fecha del título de la obligación”, y no desde el 1° de enero siguiente al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada, tal como pretende el órgano recaudador. En consecuencia alega la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal que se oponen al Código Civil y Comercial.-----

-----Asimismo invoca la prescripción de la **multa** por aplicación del principio de la ley penal más benigna, el artículo 2° del Código Penal y normas afines de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.-----

-----Abordando los **argumentos de fondo**, cuestiona el ajuste realizado en la supuesta **omisión de ingresos de “operaciones celebradas con organismos del Estado”** y expresa que la venta de especialidades medicinales que realiza -por sí o por intermediarios- no configura el supuesto de venta a “consumidor final”, cita el Decreto N° 4002/2000 e interpreta que el

Estado, al adquirir esos productos, técnicamente no los “consume”, sino que los adquiere para posteriormente proveer servicios de salud a la población.-----

-----Seguidamente objeta el ajuste del Fisco referido a la **deducción de los “Descuentos sobre Ventas Fijo”, “Descuentos sobre Ventas Bonific.”, “Descuentos Transfer” y “Descuento PAP”,** por no encuadrar en el supuesto del artículo 189 inciso a) del Código Fiscal.-----

-----Cuestiona que el Fisco desconozca los usos y costumbres de este mercado en toda la cadena de comercialización, puesto que los descuentos son habituales, especialmente los otorgados por acuerdos con obras sociales. Este desconocimiento -sostiene- no explica la naturaleza que tiene esa detracción en el precio del producto y postula que una norma así determinaría una base imponible con más ingresos que los efectivamente devengados por la actividad gravada, lo que conduciría a suponer en el legislador ignorancia, ligereza, desinformación, incapacidad, insolvencia, interpretación contraria a la postulada por reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-----

-----A continuación, el apelante manifiesta que hubo un yerro del juez administrativo al fundamentar la exclusión de la base imponible en los artículos 188 y 189 del Código Fiscal, dado que son normas aclaratorias y de carácter ejemplificativo, carácter que –dice- este Tribunal Fiscal ha reconocido.-----

-----Reitera que los descuentos a obras sociales no son ingresos, describe su operatoria y asegura que son una pieza fundamental en la finalidad solidaria de las obras sociales nacionales y provinciales.-----

-----Por otra parte, en el agravio por el ajuste del **coeficiente de gastos** cita el artículo 3° del Convenio Multilateral y señala que los gastos de publicidad y de pago de regalías, son gastos computables a los efectos de la determinación del coeficiente unificado, sin que ARBA se encuentre autorizada para excluirlos.-----

-----Asimismo solicita se respete la asignación de los gastos en el rubro “Transportes y fletes” realizada por la contribuyente (50% al lugar de origen y 50% al lugar de destino), dado que ARBA modificó el coeficiente de ingresos, cuando ésta no corresponde. -----

-----También objeta el ajuste de **pagos a cuenta** tomados en las respectivas declaraciones juradas, y concluye que con ese proceder el Fisco se aleja de la



búsqueda de la verdad material y no aplica el principio de la carga dinámica de la prueba. Ofrece nuevamente prueba sobre este punto.-----

-----Luego, en lo que respecta a la **multa**, invoca en primer término la inexistencia del aspecto objetivo de la figura omisiva, por considerar que ha liquidado en forma correcta el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Destaca además, la inexistencia del aspecto subjetivo, en la medida que no se acreditó el requisito subjetivo de la culpa en sentido amplio. En subsidio plantea error excusable al expresar que su actuar no fue negligente o culpable, tal como requiere la figura infraccional imputada y que las constantes contradicciones en las que incurrió el Fisco a lo largo de todo el procedimiento determinativo se reflejan en el acto cuestionado y liberan al contribuyente de cualquier sanción.- -

-----Ofrece prueba documental, de informes y pericial contable. Formula reserva del caso Federal.-----

-----A su turno, los Sres. Rodolfo Civalé, Carlos Mayotti y Esteban Gully adhieren a los argumentos expuestos por la firma y, en forma subsidiaria, plantean la improcedencia de la imputación de la responsabilidad solidaria por considerar que contraría el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional. Luego, sostienen que dicha atribución debe fundarse en una conducta efectivamente desplegada por el sujeto y no en una causal objetiva, como es la de ocupar un cargo en el directorio de la sociedad. Citan doctrina y jurisprudencia (tanto del Tribunal Fiscal de la Nación como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y agregan que han actuado con la debida diligencia que exige el artículo 59 de la Ley 19550.-----

-----Concluyen su presentación cuestionando la atribución por parte del Fisco de responsabilidad solidaria en materia de multas, por entender que su procedencia conculcaría lisa y llanamente el artículo 18 de la Constitución Nacional en razón de la naturaleza penal que revisten.-----

II.- Que a su turno la Representación Fiscal, comienza respondiendo la **nulidad** invocada, haciendo propios los argumentos expresados en el acto cuestionado y señala que el Decreto N° 166/2020 estableció la suspensión de plazos y procedimientos administrativos con excepción de aquellos que por su naturaleza resulten impostergables a los fines de las tareas de recaudación,

advirtiendo que existía el riesgo de prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de las diferencias reclamadas. Agrega que ARBA ha respetado todas las etapas y requisitos legales para emitir un acto válido y eficaz y para que sea factible su procedencia es necesario que la omisión y violación de normas procesales sea de carácter grave y solemne y limite seriamente el derecho de defensa.-----

-----En respuesta al planteo de **prescripción** destaca que el artículo 2532 del Código Civil y Comercial viene a confirmar la postura del Fisco en torno a la regulación de este instituto en materia tributaria, como una potestad no delegada por las provincias al Congreso Nacional, que debe ser regulada de manera excluyente por el derecho local. Refiere que el Código Fiscal es un ordenamiento de derecho sustantivo, resultando lógico que regule sobre la temática y que de ningún modo se opone a la supremacía de las leyes nacionales prevista en el artículo 31 de la Constitución Nacional, sino que se trata de las facultades ejercidas por la jurisdicción provincial en uso del poder reservado (arts. 104 y 105 CN).-----

-----Cita doctrina y jurisprudencia y concluye que el plazo prescriptivo liberatorio de la acción para determinar y exigir el pago de los tributos provinciales, como aspecto propio del derecho tributario sustancial, no queda fuera del derecho público local y a su regulación exclusiva e inherente a los Estados Provinciales, que han conservado dicha potestad desde el momento de la conformación misma del Estado Federal.-----

-----En punto a la prescripción de la multa opuesta alega que ese plazo se encuentra suspendido por aplicación de las causales de suspensión que establece el artículo 161 del Código Fiscal.-----

-----Seguidamente rebate los **agravios de fondo**, comenzado con referido a **Operaciones celebradas con organismos del Estado**. Destaca que, luego de la producción de la medida para mejor proveer, la fiscalización ha ratificado el ajuste practicado tomando como base el Informe de ARBA N° 23/2007, el artículo 217 Código Fiscal y el Decreto N° 4002/2000, al considerar que los bienes involucrados en esas operaciones no se los incorpora al desarrollo de una actividad económica privada ulterior, debiendo consecuentemente tributar



esas operaciones como “ventas a consumidor final”.-----

-----De la misma manera, expresa que en el ajuste de la deducción por “**Descuentos sobre Ventas Fijo**” “**Descuentos sobre Ventas Bonif.**” “**Descuentos Transfer**” y “**Descuento PAP**” no es aplicable la deducción prevista en el artículo 189 Código Fiscal porque se constató que no existe vinculación documental de la detracción (Notas de Crédito) con la operación de venta que dio origen al ingreso gravado. Asimismo, destaca que el contribuyente no instó la prueba ofrecida en el descargo, que fue proveída y admitida en su oportunidad.-----

-----Idéntico criterio adopta en relación a la deducción de los **descuentos a obras sociales** y destaca que no se discute la condición de “deducibles” -de la base imponible- de esos conceptos, sino su acreditación como tal, situación que sí ha verificado el Fisco respecto a los conceptos de: “Convenio Obra Social”, “Convenio PAMI” y “Descuentos Monroe”.-----

-----En relación al ajuste del **coeficiente de gastos**, destaca que los gastos de publicidad y los de regalías son no computables a los efectos del armado del coeficiente unificado aplicable al período fiscalizado, siguiendo en este punto el criterio sentado en el informe de la Dirección Técnico Tributaria N° 41/00 y agrega que la Resolución General CACM N° 8/2020 (B.O. 03/12/2020) no modifica las conclusiones de la fiscalización, tal como resulta de su art. 5° “*Las disposiciones de la presente resolución serán de aplicación para la determinación de los coeficientes que se apliquen a partir del período fiscal 2020*”.-----

-----En punto al agravio referido a que se modificó el coeficiente de gastos del rubro “Transportes y Fletes” señala que el apelante reproduce idénticas críticas que las expresadas en el descargo y que las quejas resultan generales y abstractas y no realiza una crítica concreta y razonada del ajuste practicado por el Fisco. -----

-----Rebate la alegada falta de consideración de los **pagos a cuenta** al afirmar que el recurrente no aportó documentación respaldatoria que avale sus alegaciones.-----

-----Respecto del agravio por la **sanción** impuesta, considera que la conducta

del contribuyente se corresponde con la tipificada en el art. 61 del Código Fiscal y por ello entiende procedente su aplicación, sin necesidad de demostrar la existencia de intención alguna de su parte, por haberse verificado el incumplimiento de la obligación fiscal y no haberse acreditado causal atendible que, bajo el instituto del error excusable, lo exima.-----

-----Finalmente rebate los agravios referentes a la **responsabilidad solidaria** de los integrantes del órgano de administración, remarcando que el instituto aplicado reconoce su fuente en la ley, y se encuentra en cabeza de quienes, por la especial calidad que revisten o la posición o situación especial que ocupan, el Fisco puede reclamarles la totalidad del impuesto adeudado, multa y recargos independientemente del obligado directo. Se encuentra en cabeza de los responsables -dice- la prueba de la inexistencia de culpa, y considera que en el caso no se ha verificado este extremo. -----

-----Aclara además que la responsabilidad en el ámbito provincial no reviste carácter subsidiario, ni procede el beneficio de excusión porque se trata de una obligación a título propio por deuda ajena.-----

-----A su vez, y en lo que respecta a la invocada supremacía de la Ley de Sociedades Comerciales por sobre la normativa provincial, entiende que dicho agravio trasluce un cuestionamiento de la autonomía del Derecho Tributario, que regula este instituto en razón de las facultades constitucionales propias en esta materia retenidas por las provincias. -----

-----Por último, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 21 del código fiscal, y aplicación de la doctrina del fallo “Fisco de la provincia de Buenos Aires s/ Raso Hermanos SAICIFI s/Juicio de Apremio”, para pronunciarse en el sentido indicado por los presentantes, señala que en el mismo no se ha conformado la mayoría de votos necesarios, mal puede sostenerse que la Suprema Corte haya declarado la inconstitucionalidad del art. 21 (actual 24) del Código Fiscal. Cita nuevos precedentes judiciales y solicita, se confirme la resolución en este punto.-----

III.- Voto del Dr. Angel Carlos Carballal: Que, conforme ha quedado delimitada la cuestión en debate, procede decidir si se ajusta a derecho la Disposición Delegada SEATYS N° 1744/2020.-----



-----Que a tal efecto y atento a la resolución que se dicta en el presente, en virtud del principio de economía procesal y a fin de evitar dispendio de actividad jurisdiccional, impera atender sin más el planteo prescriptivo invocado.-----

-----Así pues, la parte apelante alega los preceptos del Código Civil (en su anterior redacción), por resultar una norma de rango superior, deviniendo inconstitucional el artículo 159 del Código Fiscal, todo ello sobre la base del complejo de antecedentes jurisprudenciales, con particular referencia a cada uno de los argumentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia a partir del caso "Filcrosa", y su alcance, doctrina reiterada en decisiones posteriores (Fallos: 327-3187; 332-616 y 2250, entre otras); y asumida por la Suprema Corte bonaerense, luego de varios años de oponerse, ya que terminó adhiriendo a esta vertiente -por mayoría de sus miembros- a partir del pronunciamiento en autos "Fisco de la Provincia de Bs As. Incidente de revisión en autos: Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Lda. Concurso preventivo" (C. 81.253). -----

-----Decididamente me resulta refractaria tal doctrina, en tanto intenta imponer un criterio unitario, uniforme para todas las Provincias en materia de prescripción así como de toda cuestión que, vinculada al derecho tributario sustantivo, se encuentre regulada en los denominados códigos de fondo (artículo 75 inciso 12 C.N.); uniformidad que sin embargo, no alcanza a la Nación, quien continúa regulando con total independencia la materia.-----

----- Así las cosas, se llega a la subordinación pretensa, desdoblando toda la teoría general del hecho imponible y de la mencionada rama jurídica (cuya autonomía receptan los Altos Tribunales, aunque de manera muy llamativa), y desvalorizando las potestades tributarias originarias de los estados provinciales, aunque reconocidas por la Corte como originarias e indefinidas, convertidas sin embargo en residuales, de segunda categoría al igual que los plexos jurídicos que las reconocen y regulan.-----

-----Paralelamente, se termina aceptando la idea de considerar al Código Civil y no a la Constitución Nacional, como fuente de facultades locales para legislar en materias sustantivas tributarias, produciendo la pérdida, no solo de su autonomía sino más bien de buena parte de su contenido en manos de una

rama jurídica con objetivos, fundamentos, principios y normas totalmente ajenas. Alcanzamos así un derecho tributario sustantivo nacional, completo, autónomo, independiente e ilimitado en este campo y un derecho tributario sustantivo provincial condicionado al extremo, cuasi residual, con pérdida de cualquier atisbo de autonomía y con parte fundamental de su contenido regulado por Códigos nacionales. Tal consecuencia, no solo no se encuentra expuesta en el inciso 12 del mencionado artículo 75, sino que más bien resulta contraria al reparto de potestades que realiza su inciso 2) y principalmente, a los artículos 121, ss. y ctes.-----

-----Establece el propio Código Civil en el artículo 3951 de la anterior redacción: *“El Estado general o provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente oponer la prescripción...”*. Parece poco probable que, no ya la potestad de dictar normas que establezcan tributos, sino acaso las acciones para determinar de oficio una obligación tributaria sean susceptibles de privatizarse. Tampoco puede entenderse que fuese decenal la prescripción para los Impuestos de Sellos y a la Transmisión Gratuita de Bienes (arts. 4023 y concordantes del CC), así como para las obligaciones del agente de recaudación conforme lo ha resuelto la jurisprudencia (Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en la causa “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mareque Jesús s/ Apremio Provincial”, sentencia del 16.09.2008).-----

-----En definitiva, por lo expuesto y los demás fundamentos desarrollados en diversos pronunciamientos de la Sala I que integro (Registros N° 2117 del 29/12/2017; N° 2142 del 14/08/2018; N° 2145 del 13/09/2018; N° 2171 del 26/03/2019; N° 2175 del 04/04/2019; entre otros) a los que remito en honor a la brevedad, siempre he opinado que ni el Código Civil ni ningún otro de los mencionados en el artículo 75 inciso 12) de la C.N., ha sido, es, o será aplicable a la materia bajo análisis.-----

-----Asimismo, entendí que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial Unificado, que expresamente produce reformas en esta cuestión como forma



Provincia de Buenos Aires

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
Centro Administrativo Gubernamental Torre II
Piso 10 – La Plata

Corresponde al Expte. N° 2360-0536161/17
“LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C.Y.F.”

explícita de terminar con la doctrina “Filcrosa”, definía la discusión sobre el tema (Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en autos “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23/10/15), declarando de una vez que la regulación de cuestiones patrimoniales, en el ámbito del derecho público local, integra los poderes no delegados a la nación, toda vez que las provincias sólo facultaron al Congreso para la regulación de las relaciones privadas de los habitantes del país, teniendo como fin lograr un régimen uniforme de derecho privado (arts. 121, 126 y concordantes de la CN).-----

-----Sin embargo, primero la Suprema Corte de Justicia bonaerense (en autos “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL. Apremio. Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, Sentencia del 16 de mayo de 2018, entre otras) y más recientemente la propia Corte nacional (en autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”, Sentencia del 5 de noviembre de 2019), han opinado de manera muy distinta, advirtiendo con distintos fundamentos y mayorías, que por cuestiones vinculadas a la vigencia de las normas, las reformas reseñadas reconocen un límite temporal a su aplicación (1° de agosto de 2015): “...Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (doctrina de Fallos: 297:117 y 317:44) sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997, esto es, que fue constituida y se tornó exigible bajo la vigencia de la ley anterior; que su determinación de oficio ha sido realizada varios años antes del dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -resolución 2506/02 de la Dirección General de Rentas de Misiones del 18 de diciembre de 2002- y, que lo mismo ha ocurrido con la decisión final adoptada por la administración -resolución 183, del 4 de mayo de

2005 del Ministerio de Hacienda, Finanzas Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones-, de manera tal que el plazo de prescripción para reclamar el ingreso de aquel tributo, se ha iniciado y ha corrido durante la vigencia del antiguo régimen ...En consecuencia, se está en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico ... conduce a concluir que el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal..." (CS en causa "Volkswagen" ya citada).-----

-----Asimismo, fue tajante la posición de la mayoría del Alto Tribunal, en relación a la obediencia que los tribunales inferiores deben a los criterios de aquel: "...cabe señalar que carecen de fundamentos las resoluciones de los tribunales inferiores -inclusive las de los Superiores Tribunales locales- que se apartan de lo decidido por aquella sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición adoptada por el Tribunal, especialmente, en supuestos en los que dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante desde el inicio de las actuaciones (doctrina de Fallos: 307:1094; 311:1644; 312:2007; 316:221; 320:1660; 325:1227; 327:3087; 329:2614 y 4931; 330:704; 332:616 y 1503 entre muchos otros). En efecto, la autoridad institucional de los precedentes de la Corte Suprema, fundada en la condición del Tribunal de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos sus conclusiones deban ser debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por aquella como por los tribunales inferiores (doctrina de Fallos: 337:47)...".-----

----- Razones de republicanismo básico me llevan entonces a acatar la doctrina "Filcrosa", a pesar de mi absoluta disidencia, y aplicarla a los supuestos que debo juzgar, al menos dentro del marco temporal exigido por el precedente mencionado.-----

-----Lo expuesto, sin embargo, no me exime de revisar distintas cuestiones que dogmáticamente se han venido aseverando, siendo necesario que esta nueva lectura de la situación se acompañe de razonamientos que no han sido objeto



de análisis por los Altos Tribunales, o bien que sus conclusiones no resultan enteramente aplicables al caso bajo estudio en los presentes actuados. _____

-----Considerando que el plazo quinquenal no es objeto de debate alguno, lo primero a definir es a partir de cuándo comienza el cómputo del mismo, deviniendo inaceptable el previsto por el Código Fiscal (1° de enero del año siguiente al del vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual). Sobre el particular, suele citarse como remedio absoluto a la cuestión, el criterio seguido por la Corte en la causa “Ullate” en el cual se habría decidido el inicio del cómputo al momento del vencimiento de cada uno de los anticipos del impuesto. Releyendo el pronunciamiento, esto no aparece con tanta claridad: *“...la Cámara en lo Criminal, Correccional, Civil y Comercial de Familia y del Trabajo de Laboulaye confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había hecho lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada y rechazado la presente ejecución fiscal por la que se perseguía el cobro del impuesto de infraestructura social correspondiente a los períodos 2, 3 y 4 de 1997, con vencimiento los días 11 de julio, 14 de agosto y 16 de octubre de dicho año, respectivamente...En tales circunstancias la aplicación de dicha doctrina a la constancias de la causa, me llevan a tener por prescripta la deuda ya que con respecto al último de los períodos discutidos la liberación ocurrió el 16 de octubre de 2002, sin que para éste o para los anteriores períodos reclamados se hubiere alegado ni mucho menos demostrado la ocurrencia de alguna causal que hubiera suspendido o interrumpido su transcurso...”* (Dictamen del Procurador del 16/05/2011 que la Corte hace suyo en “Fisco de la Provincia C/ Ullate Alicia Inés - Ejecutivo- Apelación- Recurso Directo”, Sentencia del 1° de noviembre de 2011).-----

-----En concreto, tenemos la evaluación de otro impuesto de otra jurisdicción local, la consideración de “períodos” (no se menciona la palabra “anticipos”) y, procesalmente, el debate de la cuestión en el marco de una ejecución fiscal (no de una determinación de oficio, es decir, existía en “Ullate” una obligación ejecutable, extremo que no se verifica en una determinación de oficio, sino hasta su firmeza).-----

-----Lo expuesto, me lleva a considerar que la prescripción que aquí se

requiere, refiere particularmente a las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por el Código Fiscal y para aplicar y hacer efectivas las sanciones en él previstas. Pregunto entonces qué es lo que se ha determinado? Anticipos? Otros pagos a cuenta? Cuotas? O períodos fiscales ya cerrados? (sea en forma total o parcial). Sin dudas es esto último. Sería ilícito pretender determinar y exigir el pago de anticipos una vez cerrado el período fiscal. Asimismo, la Agencia de Recaudación se ve impedida de determinar de oficio la obligación tributaria de un período fiscal, hasta tanto ese período se encuentre “cerrado”, esto es, vencido el plazo para la presentación de la mentada declaración jurada anual. Mal podría entonces comenzar el cómputo de la prescripción de una acción, en forma previa al nacimiento de la misma, a la posibilidad de ejercerla. Y ello sin perjuicio de distintos mecanismos que le permiten exigir al Fisco los pagos a cuenta no abonados (artículos 47, 58 y cctes del Código Fiscal).-----

-----Advierto que tal argumento se encuentra en línea con la reiterada doctrina de la Corte Suprema nacional, que sostiene que *“la prescripción liberatoria no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable”* (Fallos: 308:1101; 318:2575; 320:2289, 2539; 321:2310 y 326:742) o, en otras palabras, que el plazo de la prescripción liberatoria sólo comienza a computarse a partir del momento en que *“la acción puede ser ejercida”* (conf. Fallos: 308:1101; 312:2152; 318:879; 320: 2539; 321:2144; 326:742 y 335:1684). En idéntico sentido se ha expresado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: *“... Enseña Argañarás que, aunque el derecho creditorio exista, la prescripción no corre si no está abierta y expedita la vía para demandarlo”. Citando a Planiol dice: “La prescripción no puede comenzar antes porque el tiempo dado para la prescripción debe ser un tiempo útil para el ejercicio de la acción y no puede reprocharse al acreedor, de no haber accionado en una época en que su derecho no estaba expedito. Si así no fuera, podría suceder que el derecho quedara perdido antes de poder ser reclamado; lo que sería tan injusto como absurdo”* (Argañarás, Manuel J. *“La prescripción extintiva”*, pág. 50)...” (en autos “Vicens, Rafael René contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa”, Sentencia del 29 de junio de 2011).-----



Provincia de Buenos Aires

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
Centro Administrativo Gubernamental Torre II
Piso 10 – La Plata

Corresponde al Expte. N° 2360-0536161/17
“LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C.Y.F.”

-----Para así concluir, deviene asimismo necesario recordar la clasificación que distingue a los impuestos según el aspecto temporal de su hecho imponible, encontrándose aquellos denominados “instantáneos” (Sellos/Transmisión Gratuita de Bienes, ambos de prescripción decenal bajo la doctrina “Filcrosa”), los “anuales” (Inmobiliario, Automotores, cuyo hecho imponible nace el 1° de enero de cada año y su pago es fraccionado en cuotas) y los “periódicos” o “de ejercicio” (Ingresos Brutos: en este caso coincidiendo con el año calendario, su hecho imponible comienza a nacer el 1° de enero y termina de hacerlo el 31 de diciembre. Su pago es fraccionado por la Ley en “anticipos” mensuales, autodeclarados o liquidados administrativamente, pero siempre con naturaleza de pago a cuenta: no definitivo).-----

-----Esta limitación de los anticipos, su temporaneidad, hace que una vez que sea exigible el tributo al operarse el cierre del período fiscal anual y cumplirse el plazo para la presentación de la declaración jurada, caduca la facultad del Fisco provincial para perseguir su cobro o el de sus accesorios por incumplimiento en su ingreso. Dicho en otras palabras, a partir del vencimiento del plazo para ingresar el impuesto anual, que hace nacer la acción del Fisco para perseguir su pago, si no se hubiera verificado en todo o en parte, los anticipos se extinguen como obligación sujeta a exigibilidad autónoma. Ello así, por su distinta naturaleza jurídica, ya que no son más que un pago a cuenta de un tributo cuya exigibilidad como tal no ha nacido. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido “...Los anticipos, cuya constitucionalidad ha admitido esta Corte (Fallos: 235:787), [...] constituyen obligaciones de cumplimiento independiente (Fallos: 285:117); y precisamente esa nota de individualidad, que autoriza a concebirlos como obligaciones distintas al ‘impuesto de base’, descarta toda vinculación con el mentado procedimiento de determinación de oficio, el que, por definición, tiene por objeto establecer la materia imponible...” (Fallos: 316:3019). En igual sentido se ha expedido el Dr. Pettigiani, en Sentencia del 29 de mayo de 2019, Causa A. 71.990, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Barragán y Cía. S.A.C.I.F.I.A. y otros. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”.-----

-----Por ende, entiendo que no resulta de aplicación la “interpretación” que

suele aseverarse sobre el alcance del fallo “Ullate”, debiéndose realizar un análisis más específico sobre la casuística aquí valorada.-----

-----Suele citarse asimismo en análogo sentido (y erróneamente) el precedente CSJ 37/2011 (47-G)/CS1 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Bottoni, Julio Heriberto s/ ejecución fiscal – radicación de vehículos”, fallado el 6 de diciembre de 2011, y referido al Impuesto a los Automotores, tributo que nace y se cuantifica al principio del año fiscal, posibilitando la Ley el pago en cuotas del mismo (es decir, pago fraccionado de una obligación ya nacida y cuantificada).--

-----En línea con lo expuesto, recordemos que establecía el Código Civil en su artículo 3956: *“La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación”*.-----

-----Consecuentemente, siendo un impuesto de período fiscal anual (Ley de Coparticipación Federal y su consecuente artículo 209 del Código Fiscal), en el que sin perjuicio del ingreso de anticipos y otros pagos a cuenta, se deberá presentar una *“...declaración jurada en la que se determinará el impuesto...”* de ese año e incluirá el resumen de la totalidad de las operaciones del período (artículo 210 del Código Fiscal), corresponde considerar el inicio del cómputo del plazo quinquenal de prescripción, el día de vencimiento de esa declaración jurada anual, objeto de revisión y que de ser impugnada o no presentarse, dará lugar al procedimiento de determinación de oficio (artículo 44 y cctes. del Código Fiscal) cuya prescripción se analiza.-----

-----Sentado lo anterior, debe traerse a análisis que las presentes actuaciones se relacionan con el período fiscal 2013 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral. La declaración jurada anual tuvo vencimiento para su presentación el 30 de junio de 2014 (Resolución General C.A.C.M. N° 8/2013), comenzando así el cómputo prescriptivo, el que hubiese vencido el día 30 de junio de 2019.-----

-----Sin embargo, según constancias de fs. 674/675, con fecha 28 de marzo de 2019, se notificaron las diferencias liquidadas por la fiscalización actuante mediante acta de Comprobación R-078 A N° 010351364, ocasionando esto un supuesto de “constitución en mora” en los términos del artículo 2541 del nuevo C.C. y C, (ya vigente desde el 1° de agosto de 2015 según arts. 7 y 2537 de la



Ley N° 26.994): “Suspensión por interpelación fehaciente. El curso de la prescripción se suspende, por una sola vez, por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor. Esta suspensión sólo tiene efecto durante seis meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción.”.-----

-----Recordemos sobre el particular que el criterio expuesto ha sido receptado por la propia Corte Suprema (Sentencia del 21 de junio de 2018. Autos: “Banco de la Nación Argentina c/ GCBA –AGIP DGR— resol. 389/09 y otros s/ proceso de conocimiento”): “...Más aún, en esa hipótesis este se vería suspendido por un año, ya sea por el acta de requerimiento notificada el 29 de agosto de 2007 (fs. 748 del expediente administrativo) o debido al inicio del procedimiento de determinación de oficio (resolución 3500-DGR-2007, dictada el 23 de octubre de 2007 y notificada el 25 del mismo mes y año –fs. 906/908 y 922 del expediente agregado-) ya que la norma de fondo prevé la suspensión de un año por la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica (art. 3986 del Código Civil), esto es, mediante un acto que no ofrezca dudas acerca de la veracidad del reclamo y la oportunidad de su realización (Fallos: 318:2558; 329:4379, entre otros)...”.-----

-----Una detenida lectura de este reciente antecedente nos permite observar que el fallo realiza a modo de *obiter dictum* esta importante consideración, en cuanto expresa que el acta de requerimiento cursada al contribuyente por el organismo recaudador informando preliminarmente la existencia de ciertas diferencias tributarias (prevista) igualmente provoca la suspensión del curso de la prescripción, pues ello importaba constituir en mora al deudor en forma auténtica.-----

-----Volviendo entonces al análisis de estos actuados, transcurridos cuatro años y casi nueve meses de prescripción, en el mes de marzo de 2019 se suspende hasta el mes de septiembre de 2019, retomando el cómputo pertinente, el que venció inexorablemente el 30 de diciembre de 2019.-----

-----Como vemos, previo a ello y en término útil, no se visualiza la existencia de acto alguno que suspenda nuevamente o interrumpa el curso de la prescripción. La notificación del acto ahora apelado y la interposición de los recursos bajo



Provincia de Buenos Aires

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
Centro Administrativo Gubernamental Torre II
Piso 10 – La Plata

tratamiento, se producen a posteriori, recién en los meses de junio y julio de 2020, conforme las constancias de fojas 1290/1294, 1295 y 1347, respectivamente.-----

-----Concluyo en consecuencia, que debe prosperar el planteo prescriptivo de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sustanciales correspondientes al período fiscal 2013, bajo una doctrina que no comparto y debo acatar; lo que así Voto.-----

-----Idéntica solución ha de adoptarse con relación a los poderes y acciones de la Autoridad Fiscal para aplicar y hacer efectiva la multa por omisión de impuesto constatada en el mismo período fiscal, comenzando a correr el plazo el 1° de enero de 2014 y feneciendo el 1° de enero de 2019, sin verificarse causal alguna de suspensión o interrupción, correspondiendo declararla prescripta haciendo lugar al planteo sobre el particular; lo que así también Voto.

-----Ante lo expuesto, deviene abstracto el tratamiento de los restantes agravios traídos, lo que así declaro.-----

POR ELLO, VOTO: 1º) Hacer lugar los recursos de apelación interpuestos a fs. 1295/1320 por el Sr. Hermenegildo Pini en representación de LABORATORIOS ELEA PHOENIX S.A. (antes Laboratorios Phoenix S.A.I.C.Y.F.), con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Grinberg y por este letrado a fs. 1347/1351, en representación y patrocinio de los Sres. Rodolfo Civalé, Carlos Mayotti y Esteban Gully, contra la Disposición Delegada SEATYS N° 1744, dictada con fecha 24 de junio de 2020, por el Departamento Relatoría II de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 2º) Dejar sin efecto el acto apelado, declarándose la prescripción de las acciones fiscales para determinar de oficio las obligaciones perseguidas, así como para aplicar la sanción dispuesta en el acto apelado. Regístrese, notifíquese y devuélvase.-----

Voto Del Cr. Rodolfo Dámaso Crespi: que tal como ha quedado delineada la cuestión sometida a debate, corresponde establecer si –en función de las impugnaciones formuladas por la parte apelante– la disposición delegada seatys n° 1744, dictada con fecha 24 de junio de 2020, por el departamento relatoría ii de la agencia de recaudación de la provincia de buenos aires, se ajusta a derecho.-----



Provincia de Buenos Aires

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
Centro Administrativo Gubernamental Torre II
Piso 10 – La Plata

Corresponde al Expte. N° 2360-0536161/17
“LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C.Y.F.”

-----Así, frente al planteo prescriptivo opuesto contra las facultades determinativas de la Autoridad de Aplicación, vinculadas al período fiscal 2013, debo señalar que en virtud de los fundamentos expuestos en su voto, adhiero a lo resuelto por el Dr. Ángel C. Carballal, sin perjuicio de remitir, a mayor abundamiento, a las consideraciones que expusiera en mi voto para la causa “Total Austral S.A. Sucursal Argentina” (Sentencia de Sala III de fecha 15 de diciembre de 2020, Registro N° 4217), en torno a la limitación de las potestades locales, en punto a la regulación de la prescripción liberatoria en materia fiscal a la luz de la denominada “Cláusula de los Códigos” (artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional); y “Rigolleau S.A.” (Sentencia de Sala II de fecha 9 de octubre de 2018, Registro N° 2721), en lo referente al régimen aplicable a facultades sancionatorias del Fisco.-----

-----En tal sentido, dejo expresado mi voto.-----

Voto de la Dra Irma Gladys Nancuñil: Adhiero al voto del Dr Ángel Carlos Carballal.-----

POR ELLO, SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar los recursos de apelación interpuestos a fs. 1295/1320 por el Sr. Hermenegildo Pini en representación de LABORATORIOS ELEA PHOENIX S.A. (antes Laboratorios Phoenix S.A.I.C.Y.F.), con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Grinberg y por este letrado a fs. 1347/1351, en representación y patrocinio de los Sres. Rodolfo Civale, Carlos Mayotti y Esteban Gully, contra la Disposición Delegada SEATYS N° 1744, dictada con fecha 24 de junio de 2020, por el Departamento Relatoría II de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 2º) Dejar sin efecto el acto apelado, declarándose la prescripción de las acciones fiscales para determinar de oficio las obligaciones perseguidas, así como para aplicar la sanción dispuesta en el acto apelado. Regístrese, notifíquese y devuélvase.-----

CARBALLAL

Angel Carlos

Firmado digitalmente
por CARBALLAL Angel
Carlos

Fecha: 2023.04.19
11:05:36 -03'00'

Dr Angel Carlos Carballal
Vocal Subrogante
(A. E. N° 100/22)
Tribunal Fiscal de Apelación
Sala II

CRESPI
Rodolfo
Damaso

Firmado
digitalmente por
CRESPI Rodolfo
Damaso
Fecha:
2023.04.19
13:16:00 -03'00'

Cr. Rodolfo Dámaso Crespi
Vocal
Tribunal Fiscal de Apelación
Sala II

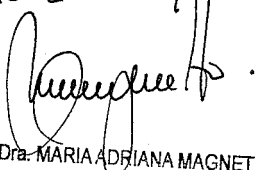
NANCUFIL
Irma Gladys

Firmado digitalmente por NANCUFIL Irma
Gladys
DN: SERIALNUMBER=CUIL, 27246400038
C=AR, CN=NANCUFIL Irma Gladys
Razón: Estoy aprobando este documento
con mi firma legalmente vinculante
Ubicación:
Fecha: 2023.04.19 13:35:31 -03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 12.1.0

Dra. Irma Gladys Nancufl
Conjueza
(A.O. 59/22 A.E. N° 102/22)
Tribunal Fiscal de Apelación
Sala II

REGISTRO N.º 3320
19/4/23

SENTENCIA FIRMADA
CONF. AC. EXT. 96/20 .


Dra. MARIA ADRIANA MAGNETTO
Secretaría de Sala II
Tribunal Fiscal de Apelación